

# Sentires y saberes: Desigualdades socioambientales y elecciones

Boletín 5

Julio 2021

Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra

## Ejes de reflexión

- Políticas públicas
- Proceso electoral
- Incidencia política
- Desigualdades
- Conflictos socioambientales

## Contenido:

Costa Rica y la Pandemia	2
Tareas postergadas	3
Conservación y REDD+	3
Costa Rica y su riqueza natural	4
¿Quiénes participan en la política?	5
Monocultivos en Costa Rica	6
Mujeres defensoras	7
Pescar en Costa Rica	8
Mercado Eléctrico	9
Aspiraciones electorales	9

## Elecciones y desigualdades: ¿Quiénes toman las decisiones?

Nos acercamos a un nuevo proceso electoral en Costa Rica, marcado por la continuidad de la Pandemia de la Covid-19 y la imperante necesidad de la reactivación económica.

Esta situación ha empujado a muchos sectores a utilizar su influencia para posicionar sus intereses en las diversas agendas: mediáticas, políticas, económicas y cómo no, electorales.

Este boletín les invita a reflexionar estos procesos en clave de desigualdades socioambientales, es decir ¿Cuáles son aquellas relaciones predominantes entre los diversos sectores y su estructuración al respecto de los bienes

naturales presentes en el territorio? Jerarquías, influencias, despojos, explotación o marginalidad son temas que se visibilizan cuando pensamos desde la desigualdad.



Leer y reflexionar desde esta perspectiva enriquece nuestra interpretación individual, pero también colectiva al respecto de este ciclo electoral que está por iniciar. Nos ayuda a descifrar lo “no

dicho” en los discursos, es decir los intereses encubiertos.

A partir de esta reflexión y el descubrimiento de las diversas relaciones desiguales que estamos padeciendo, debe ser punto focal para posicionar nuestro descontento, pero también en la construcción de propuestas que partan desde nuestros territorios.

Esperamos que este boletín favorezca esa lectura crítica, y contribuya en sus procesos individuales y colectivos a repensar la política electoral desde nuestros territorios.

## ¿Qué son desigualdades socioambientales?

Este tipo de desigualdades son aquellas vinculadas a dos dimensiones concretas en lo referido al acceso y al control de los bienes naturales y la desigualdad en el acceso a un ambiente sano.

Esto nos lleva a considerar algunos aspectos: por un lado, las asimetrías de poder en nuestra sociedad en torno al disponer, aprovechar, utilizar bienes naturales esenciales

para la vida, tales como el agua, pero también los conocimientos ancestrales.

La otra dimensión sobre el acceso al ambiente sano, nos lleva a reflexionar sobre las situaciones actuales en torno a la protección del ambiente, la responsabilidad sobre la actual degradación que están siendo sometidos

los bienes naturales y quienes están enfrentando las consecuencias de esta degradación.

Nos plantea los desafíos de una justicia ecológica, es decir esos mecanismos mediante los cuales desde diversas dimensiones afrontamos la reparación, la resarción, así como las responsabilidades y distribución equitativa de nuestros bienes naturales.

## Costa Rica y la Pandemia : ¿Dónde estamos?

**“Esta pandemia a nivel nacional ha dejado al desnudo los simulacros del poder que han estado imperante en los últimos tiempos”**

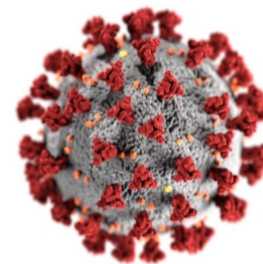
La pandemia ocasionada por el virus del Covid-19 ha traído repercusiones significativas a nivel mundial donde Costa Rica no ha sido la excepción. A pesar de esto, algunos sectores del Estado costarricense han realizado significativos esfuerzos por brindar apoyo a la población en la atención de la pandemia; además, es digno de mencionar el papel de las universidades públicas quienes han unido fuerzas para desarrollar diferentes tecnologías que apoyan en el tratamiento y abordaje integral de la pandemia. También, se debe reconocer el trabajo titánico de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas quienes han estado en la primera línea de atención, combatiendo este virus del Covid-19.

Sin embargo, la pandemia ha dejado al descubierto problemáticas estructurales que se han venido arrastrando con el tiempo, como el caso de los monocultivos y la explosión de contagios en la Zona Norte del

país; de tal manera el Seminario Universidad (2020) menciona que “La práctica normalizada de traer migrantes sin documentos a través de la frontera y contratar nacionales, para que trabajen en condiciones de explotación en labores agrícolas, sin seguro social y en condiciones de vida infrahumanas, preparó terreno para la emergencia sanitaria”. Estas prácticas van ligadas a la creciente y más notoria desigualdad social presente en país y como bien lo menciona Terán (2020) “hay desigualdades de clase, de género, raciales, que determinan quiénes sufren más y primero esta pandemia. Pero esto desborda lo que el propio sistema de poder y privilegios puede controlar. Deja al desnudo los simulacros del poder.”

Esta pandemia a nivel nacional ha dejado al desnudo los simulacros del poder que han estado imperantes en los últimos tiempos, además, distintos grupos empresariales pro-

porcionan ataques constantes al Estado de Bienestar quienes buscan dismantelar el Estado y sus múltiples instituciones, con el objetivo de privatizarlas en busca del bien de algunas pocas personas. Ahora más que nunca se ha utilizado distintos discursos de “reactivación económica” que pone en riesgo los bienes comunes y las comunidades mismas, quienes con su lógica extractivista ven la luz a través de la explotación de los ya degradados recursos naturales, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los mismos y de los pueblos en todo el territorio nacional.



## Tareas postergadas

En las últimas décadas hemos profundizado una disonancia entre dos procesos que el país ha adoptado: una política “verde” y una agenda económica neoliberal.

El informe Estado de la Nación 2019 menciona que el país “evidenció que las tareas de reducción de impactos ambientales no acompañan, de manera efectiva, las actividades productivas y el comportamiento de la población

en el uso del territorio y sus recursos” (EN 2019: 137).

Dentro de esta agenda neoliberal podemos reseñar algunas actividades: Expansión de monocultivos, sobreexplotación de recursos pesqueros, proliferación de hidroeléctricas, entre otros. Estos procesos han profundizado situaciones críticas: Poca o nula participación comunitaria, mal manejo de residuos, escasez de agua, alto consumo de hidrocarburos,, ausencia de tratamien-

tos de aguas residuales, uso excesivo de agroquímicos y deforestación.

Estas situaciones descritas evidencian la situación de disonancia en la política de Estado, entre su perspectiva conservacionista centrada en la “descarbonización”, junto a este esfuerzo por una Política de Estado en la promoción de actividades económicas perjudiciales al ambiente y ajenas a los intereses de las comunidades que habitan los diversos territorios.

## Conservación y REDD+ ¿Para quién?

REDD+ es un proyecto cuya propuesta es compensar las causas del cambio climático por medio de la protección de bosques, para con el fin de que estos absorban el dióxido de carbono que emiten industrias, de manera que se daría un bono o pago a las personas propietarias de los bosques para que los protejan.

En el sitio web de Casa Presidencial, se señala que la iniciativa traerá beneficios tanto financieros como no financieros a las comunidades rurales e indígenas, puesto que además se propiciará la participación de mujeres rurales, pequeños y medianos productores agrícolas y de jóvenes en contratos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) (Casa Presidencial, 24 de mayo de 2021, párr. 3).

Sin embargo, las comunidades han denunciado en múltiples ocasiones que no ha habido participación o negociación conjunta, ni mucho menos un proceso de consulta sobre el proyecto. Es

decir, el proyecto plantea beneficios para las comunidades sin siquiera haberse construido en conjunto con ellas, no existe una validación de esos supuestos beneficios.

Así, se menciona como parte del proyecto incentivar con pagos a que las comunidades construyan medios de vida sostenibles con el medio ambiente, pasando por alto que son las comunidades indígenas y campesinas las verdaderas cuidadoras de los bosques y quienes han tenido que enfrentarse a empresas explotadoras de bienes naturales protegidas por los mismos gobiernos.

Asimismo, este pago por los cuidados del bosque implica una gran limitante en cuanto a las prácticas que las comunidades realizan puesto que podrían considerarse como factores que alteran y producen daños al bosque, a pesar de que, como se mencionaba antes, históricamente han sido prácticas sus-

tentables en las que se entienden a los bosques como la vida misma.

Desde estas propuestas, no se busca una reducción real de la contaminación que grandes industrias y empresas realizan, sino que propicia un mercado de carbono al asignar un bono particular a los bosques según su capacidad de absorción de dióxido de carbono, lo que viene convirtiéndose en permisos para contaminar bajo la premisa de que los bosques están absorbiendo sus contaminantes.

Además, el proyecto únicamente contempla la emisión de dióxido de carbono de las industrias, pero no contempla la emisión de otros contaminantes ni otras prácticas que perjudican al ambiente, de manera que no hay un ataque real a las causas del cambio climático, puesto no implica una reducción a la producción de las industrias.

**“este pago por los cuidados del bosque implica una gran limitante en cuanto a las prácticas que las comunidades realizan”**



## Costa Rica y su riqueza natural, pero ¿de que hablan ?

Cuando se escucha de Costa Rica, muchas personas piensan de este país verde comprometido por la conservación del ambiente. Se toma de referencia las campañas publicitarias comandadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) “Costa Rica sin ingredientes artificiales”, “Esencial Costa Rica”. No obstante, a pesar de esta imagen, es importante preguntarnos

¿Es Costa Rica un país “verde”? ¿De verdad somos un país “sin ingredientes artificiales”? ¿Se valora lo esencial?

Lastimosamente, los datos responden lo contrario sobre el concepto “verde”. Existen importantes conflictos ambientales. En primer lugar, se puede mencionar la producción piñera, donde esta ocupa 66.670 hectáreas sembradas para el año 2017, según datos del Programa Estado de la Nación, además, esta misma fuente menciona que la producción de piña creció un 400% en 17 años, mostrando

un crecimiento anual de 23.5%. Este incremento del área de producción de la piña trajo consigo distintos puntos de conflicto en Áreas Silvestres protegidas (ASPs) “Se encontraron 78 puntos de conflicto entre plantaciones de piña y Áreas Silvestre Protegidas; las principales son en el Corredor Fronterizo y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, ubicados ambos en la Zona Norte”. (EN, 2019). Además el resto de las plantaciones se encuentran localizadas en la Zona Sur del país, en Longo Mai, Montaña General y en Montaña del Tigre, donde se ha atentado invadir territorios indígenas con el fin de aumentar el área de producción.

Por otra parte, debido a la pandemia, diferentes grupo políticos y empresariales han realizado un fuerte lobby para posicionar prácticas extractivistas (minería, exploración y explotación petrolífe-

ra, construcción de mega estructuras turísticas) como la vía rápida para reactivar, sin tomar en cuenta la degradación irreparable al ambiente y la afectación que estas prácticas pueden traer a las comunidades y a los bienes comunes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pone a Costa Rica en una posición vergonzosa, por el uso de agroquímicos y el modelo agroexportador, al mencionar que “Costa Rica se pinta a sí misma verde, como un “brócoli fresco”, ante la comunidad internacional. Sin embargo, la abrumadora presencia de plaguicidas en su agricultura derriba esa imagen que cada vez se integra en la senda del mito” (FAO,2011). Esta afirmación encienden las dudas sobre la ruta actual que está llevando el país con su modelo de desarrollo.

**“Debido a la pandemia diferentes grupo políticos y empresariales han realizado un fuerte lobby para posicionar prácticas extractivistas”**



## ¿Quiénes participan en la política? : ¿Quiénes tienen la última palabra

Costa Rica es catalogada como una democracia plena, siendo una de las democracias más antiguas en América Latina, esto según el Índice de Democracia, que es actualizado cada año por la revista británica The Economist. Sin embargo ¿Qué se entiende por democracia? Aquí el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, menciona que la democracia “es un sistema de gobierno donde la soberanía o la autoridad del poder están en el pueblo” (2012, p.10). Es por ello por lo que cada 4 años, por medio del sufragio universal, elegimos a las personas que nos representarán en la Asamblea Legislativa por medio de las diputaciones por provincia, el poder ejecutivo donde escogemos a la figura de presidencia del país y las representaciones en los gobiernos locales.

La democracia busca que la ciudadanía se encuentre activa y es por eso por lo que a nivel

institucional se tienen distintos espacios y mecanismos para alzar nuestra voz, como el caso de la Oficina de Iniciativa Popular en la Asamblea Legislativa, los referéndums, los cabildos, plebiscitos, espacios de consulta, entre otros. Sin embargo, se ve muy lejano un verdadero impacto en la toma de decisiones, estos espacios quedan en manos de unas pocas personas quienes están en las grandes esferas del poder como el caso de las cámaras empresariales y sus canales informales hacia los poderes de la república, llegando hasta influir, por ejemplo, en la no ratificación del Acuerdo de Escazú (el cual procura fortalecer la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales). Por estas acciones, se logra ver el acto impactante que tiene la

voz de las y los grandes empresarios, donde constante le da la espalda al pueblo y queda contraria la percepción de Costa Rica como un país donde todos y todas tenemos voz, motivando el desencanto de la población por participar en los espacios electorales, eso trae consigo mayor abstencionismo y da paso al poder a los mismos grupos políticos que han venido tomando las decisiones por muchos años, en beneficio de unos pocos, generando políticas que han aumentado con el tiempo las brechas tan profundas que tenemos como población costarricense.

**“estos espacios quedan en manos de unas pocas personas quienes están en las grandes esferas del poder”**



**Monocultivos en Costa Rica: situación insostenible**

“Cada vez más, los estados promueven leyes, reglamentos y convenios que favorecen los intereses particulares de las empresas y corporaciones”

Mitos comunes	Realidad
<p>“Las plantaciones de monocultivo son buenas porque dan trabajo a las comunidades”</p>	<p>Si bien las empresas de monocultivo son fuentes de empleo, en los últimos años han incrementado las denuncias de las personas trabajadoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En su mayoría, los salarios no llegan al mínimo.</li> <li>- Se trabaja más de 8 horas diarias y no se pagan horas extra.</li> <li>- Carencia de Seguro social.</li> <li>- Despidos injustificados.</li> <li>- Las personas trabajadoras que se sindicalizan sufren persecución laboral.</li> <li>- Falta de condiciones dignas de trabajo.</li> </ul>
<p>“Las plantaciones de monocultivos aportan más al desarrollo que la agricultura campesina”</p>	<p>La producción de monocultivos para la exportación responde totalmente a los mercados internacionales.</p> <p>La presencia de estas plantaciones, significa despojo de los territorios campesinos.</p> <p>A partir de la presencia de monocultivos en los territorios, cada vez se hace más necesario la importación de distintos alimentos, como los granos básicos.</p> <p>La mayoría de las empresas se han declarado por años con cero ganancias.</p>
<p>“La producción de monocultivos se hace apegado a la ley”</p>	<p>Cada vez más, los estados promueven leyes, reglamentos y convenios que favorecen los intereses particulares de las empresas y corporaciones, en detrimento de las familias productoras y los territorios.</p>
<p>“Pero cómo va a afectar la piña a la naturaleza, si uno pasa por los sembradíos y es verdecito”</p>	<p>La producción de monocultivos, afecta a los ecosistemas que la rodean y al ser necesarias grandes extensiones de tierra se deben eliminar hábitats para dar paso a una sola especie de cultivos.</p> <p>El proceso de cosecha y cultivo constante, además, no permite que el suelo recupere los nutrientes, lo que deriva en un desgaste acelerado de la fertilidad del suelo y erosión de los mismos.</p>



## Mujeres defensoras: Prácticas que sostienen la vida

Es innegable que a lo largo de toda Latinoamérica, se han impuesto desde hace décadas proyectos extractivistas que devienen de la lógica colonialista y que se perpetúa en los territorios a través del capitalismo, que sumado al patriarcado, forman un modelo de desarrollo basado en el saqueo de bienes comunes, de los cuerpos y de las raíces ancestrales. Estamos atravesando una época de aumento de los conflictos asociados a los extractivismos: minería, cultivo de transgénicos, monocultivos, proyectos hidroeléctricos, megaturismo, y esto se debe principalmente a una presión por acrecentar la exportación de los bienes de la naturaleza.

El carácter económico de los extractivismos, se ancla con un saber que lo construye y valida como modelo de productividad y con un ser que lo concreta y preserva, lo cual ocurre en la medida que tiene lugar una relación coaccionaria, que la modernidad ejerce sobre personas, sus saberes, sus territorios, sus identidades. Es por ello, que lo considerado como <común>, son aquellos espa-

cios de uso productivo bajo formas de trabajo y cuidado comunitario, donde se sembraba, se construían los hogares y se articulaban redes de subsistencia, es decir, el lugar y los bienes que posibilitan la reproducción de la vida, muchos de los cuales, hoy, sabemos que han sido privatizados, lo cual ha conducido a una mayor vulnerabilización y al empobrecimiento, principalmente de las mujeres.

Es gracias al trabajo de los cuidados que las mujeres realizan en los hogares y en la comunidad, que la vida puede continuar frente a un sistema que antepone la acumulación de capital, a la sostenibilidad de la vida de las personas y de la naturaleza, asumiendo más responsabilidades, dedicando más trabajo y energía. Lo que nos lleva a una problematización fundamental, que se trata de la responsabilidad que recae en las mujeres. La feminista comunitaria guatemalteca Lorena Cabnal (2010), comenta:

“una contradicción a lo in-

terno de los movimientos de defensa territorial es el hecho que las mujeres que conviven en el territorio tierra, viven en condiciones de violencia sexual, económica, psicológica, simbólica, y violencia cultural, porque sus cuerpos aún siguen apropiados” (p.12)

Es necesario partir de la defensa del territorio-cuerpo-tierra, como tejido contra las opresiones que sufren los cuerpos de las mujeres quienes sostienen la vida, si se producen afectaciones en la salud, consiguen el remedio en el bosque y cuidan a las personas enfermas. Si se contamina el agua del río, buscan otro lugar de dónde recogerla.

Y es que aun con las contradicciones que se dan en las organizaciones, es importante recordar que todas esas prácticas, creatividades, luchas y esperanzas que se construyen en los territorios y desde las mujeres, responden a prácticas no mercantiles basadas en la solidaridad y la reciprocidad, la convivencia y el apoyo mutuo.

**“Mientras tengamos capitalismo este sistema no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano, a las mujeres”**  
Berta Cáceres.



## Pescar en Costa Rica: Entre el mito y la realidad



**“El acaparamiento de parte de un sector industrializado, coloca en múltiples desventajas a las personas de las comunidades.”**

En 2013, la Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre, con el fin de reducir la sobre explotación de los recursos marinos. De manera que se prohibió otorgar nuevas licencias y las vigentes continuaban hasta su vencimiento. La ley para la reactivación se vetó en 2020, argumentando que “prevalece el criterio sobre un impacto ambiental y socioeconómico negativo con el restablecimiento de esta técnica de pesca, en sectores como pesca artesanal, en la biodiversidad y también sobre la actividad turística de la cual dependen tantos empleos” (DW, 31 de octubre de 2020, párr. 5)

Así, se indica el rol industrial dentro de esta práctica, puesto que la pesca de arrastre industrializada consiste en la extracción y despojo de los bienes comunes naturales, que afecta otras formas de vida, tanto en los ecosistemas como en las comunidades, quienes dependen justamente del ecosistema, tanto para sus medios de subsistencia como para sus cotidianidades, siendo el entorno que habitan y en el que se desenvuelven. El acaparamiento de parte de un sector industrializado, coloca en múltiples desventajas a las personas de las comunidades.

De igual manera, es de señalar que cómo los problemas de sobreexplotación han continuado a pesar de la reducción paulatina de las

licencias, de forma que el problema trasciende de un solo arte de pesca en particular (Obando, 2020). Para ello, es crucial reclamar cómo dentro de la problemática existen múltiples actores inmersos en relaciones de poder. Es así que si bien se habla de impactos socioeconómicos negativos dentro de las razones para el veto, estos argumentos no han partido de las necesidades y cotidianidades propiamente de las personas pesqueras, de manera que se hace política ajena y ausente de mecanismos de participación para las mismas comunidades.

Así, “la política pesquera tiene que trascender la idea de concebir en términos económicos y de conservación los océanos, mares y sus recursos, implica también el reconocimiento de una identidad pesquera, que va más allá de ingresos económicos y de reubicar a estas personas y sus comunidades en trabajos “más competitivos” y “estables””(Obando, 2020, párr. 5). Son diversas las aristas que posee la problemática sobre la pesca, con voces y realidades diferentes a los cuales el gobierno no han logrado responder.





## Mercado Eléctrico la búsqueda de la renta máxima

En el país nos hemos envuelto en una nueva discusión sobre el mercado eléctrico, sin embargo, más allá de las preocupaciones por la renta de empresarios y sus gastos asociados, debemos dirigir nuestra mirada sobre las condiciones que deben ser abordadas en las discusiones del mercado eléctrico:

-El mercado doméstico de Costa Rica se encuentra agotado en cuanto a demanda nueva, las aperturas serían principalmente para beneficiar la venta en el mercado centroamericano ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿A quien beneficia?

-¿Cuáles son las medidas para

evitar el incumplimiento de normativas, la participación e influencia política y de intereses económicos?

-¿Qué sucede con la especulación energética? La política de control y verificación en torno a la producción de energía, la regulación en la construcción de hidroeléctricas o parques energéticos: eólicos o solares.

Esta discusión tiende a estar impulsada por aquellos intereses de crear un mercado de exportación de energía que beneficiaría a unos pocos, pero ante esto debemos priorizar consideraciones como la presión sobre lugares propicios para generación eléctrica,

a costas de los ecosistemas y personas que viven en esas zonas, la capacidad de cubrir la demanda eléctrica del país, la continuidad y la calidad del flujo eléctrico son aspectos que deberíamos tener presentes cuando se habla de este tema.

Algunos desafíos: ¿Es necesario un mercado eléctrico abierto? ¿Qué tipo de competencia estaría presente? ¿Cuáles son las reglas de acceso a las redes de transmisión y distribución? ¿Cuáles son las dimensiones institucionales de gobernanza que estén en vigilancia para evitar la concentración? ¿Como se garantiza la estabilidad del sistema, financiera y técnicamente?

## Aspiraciones electorales: Bienes comunes como moneda de cambio

De cara a cualquier proceso electoral, es importante que nos posicionemos desde nuestros territorios y aspiraciones, esto quiere decir volver a mirar a nuestro alrededor e identificar qué intereses están en juego.

¿Cuáles son los grandes temas? ¿Quiénes han definido esas prioridades? ¿Qué de esas prioridades responden a nuestras necesidades?

Para el año 2021, la frase “reactivación económica” llena el espectro de “propuestas políticas” de muchas y muchos candida-

tos, es sin duda un tema que interpela a nuestras familias y comunidades. Desempleo, deudas y falta de oportunidades son tema cotidianos de nuestras conversaciones.

Sin embargo, a pesar de la urgencia que hoy tiene, resulta que hay una “reactivación económica” de la vía fácil, aquella basada en la explotación de los “recursos” naturales que sólo beneficia a unos pocos sectores industriales y financieros, y deja las consecuencias negativas en nuestros territorios, es decir la destrucción de los ecosis-

temas y el desplazamiento de nuestras comunidades.

Los bienes naturales no pueden ser moneda de cambio para la política de enriquecimiento de unos pocos, los bienes naturales representan la garantía de la reproducción de nuestras vidas, por esta razón su cuidado es responsabilidad de todas y todos.

¿Quiénes hablan de su cuidado? ¿Quiénes defienden nuestro derecho a un ambiente sano? Estas son las propuestas políticas que nos garantizan la vida más allá del mercado.

**“¿Quiénes defienden nuestro derecho a un ambiente sano? Estas son las propuestas políticas que nos garantizan la vida más allá del mercado.”**

## Referencias:

- Cabnal, L. (2010) Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. En: *Feminista Siempre*. ACSur.
- Castro Ávila, A, & Sibaja Quesada, G. (2016). Participación ciudadana en democracia: espacios y mecanismos. Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Recuperado de <https://bit.ly/3hH5uPq>
- DW (31 de octubre de 2020). Costa Rica: Carlos Alvarado veta ley que rehabilitaba pesca de arrastre. DW. Recuperado de <https://bit.ly/2TNXqmB>
- Göbel, B., Góngora-Mera M., Ulloa, A. (Editores) (2014) *Desigualdades socioambientales en América Latina*. Biblioteca Abierta Colección General, serie Perspectivas Ambientales. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <https://bit.ly/2STeG9D>
- Jiménez, R. (2009) ¿Cuáles son las consecuencias de una reforma del sector eléctrico de Costa Rica? En *Rev. Ciencias Sociales (I-II)* (2009) 123-124: pp 11-26.
- Obando, A. (12 de noviembre de 2020). Gestionar el mar es más que peces y especies. Blog FLACSO. Recuperado de <https://bit.ly/3ABvDGK>
- Obando, A. (29 de octubre de 2020). Pesca de arrastre: más allá del veto o no veto / Entrevistada por Diego Delfino. Delfino.cr
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2011). *Agronoticias: Costa Rica: Número uno del mundo en uso de agroquímicos*. Recuperado de <https://bit.ly/2TMGcGn>
- Programa Estado de la Nación (2020). Informe Estado de la Nación 2020. CONARE. Tomado de:
- Programa Estado de la Nación. (2019). La piña en Costa Rica: ubicando conflictos ambientales en Áreas Silvestre Protegidas y Ecosistemas de Humedal. Recuperado de <https://bit.ly/2V8Azm2>
- Casa Presidencial (24 de mayo de 2021). Costa Rica invertirá 54 millones en acción climática gracias a la conservación de sus bosques. Recuperado de <https://bit.ly/3wm30dm>
- Sabbatella, I. (26 de junio 2008). Una aproximación a las desigualdades ambientales. En *América Latina en Movimiento* recuperado de <https://bit.ly/3hJ4Rn7>
- Chacón, V. (4 de diciembre 2019) Costa Rica con arrastre de deudas ambientales. *Semanario Universidad*. Recuperado de: <https://bit.ly/3ywkNzN>
- Terán Mantovani, E. (marzo, 2020). El Coronavirus más allá del Coronavirus: umbrales, biopolítica y emergencias. KAOSNLARED. Recuperado de <https://bit.ly/3qSdfVy>
- Cordero Parra, M. (junio, 2020). Precariedad laboral preparó el terreno para explosión de contagios en la zona norte. *Semanario Universidad*. Recuperado de <https://bit.ly/3hLKYf8>

Este documento fue elaborado por el Equipo del Observatorio de Bienes Comunes.

**Revisión general:** José Antonio Mora Calderón

**Asistente:** Danna Escarpetta Pineda y Andrés Zúñiga Chavarría

**Docente:** Dylanna Rodríguez Muñoz

**Apoyo técnico sobre Mercado eléctrico:** Ing. Luis Daniel García Zúñiga

**Coord.** Luis Andrés Sanabria Zaniboni

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.

Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.

**Contacto:** [observatoriobienescomunes@gmail.com](mailto:observatoriobienescomunes@gmail.com)



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA



CIEP  
Centro de Investigación  
y Estudios Políticos